

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., dos (02) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Rad: 11001-31-100-30-2021-00085-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la acción de tutela instaurada a través de apoderado judicial por la ciudadana **MARY LUNA RUSSI HERRERA** identificada con la C.C 1.012.917.867; en contra de la **FISCALIA 69 SECCIONAL**, el **CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO- CAD** y la **ADMINISTRADORA DE RECURSOS EN SALUD – ADRES**.

ANTECEDENTES

A través de apoderado judicial la ciudadana **MARY LUNA RUSSI HERRERA** identificada con la C.C 1.012.917.867; interpone acción de tutela contra la **FISCALIA 69 SECCIONAL**, el **CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO- CAD** y la **ADMINISTRADORA DE RECURSOS EN SALUD – ADRES**, por considerar que se le están vulnerando el derecho fundamental de **PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**.

HECHOS Y PRETENSIONES

Refiere que su poderdante el día 23 de abril de 2020 tomo un taxi en la avenida mariscal sucre con calle 58 a efectos de dirigirse a la avenida caracas con calle 3; estando en la dirección el taxi para en el carril que va hacia el sur.

Señala que la accionante luego de realizar el pago de la carrera, siendo las 23:50 la señora RUSSI HERRERA va caminando hacia la avenida caracas, pasando por detrás del vehículo y extrañamente el conductor da reversa y la golpea, quedando enredada en el vehículo y siendo arrastrada hasta la calle 4.

Que el conductor del taxi huyo tomando la calle 4 hacia el occidente, sin importarle la vida del accionante, quien sufrió múltiples heridas tales como politraumatismo por accidente de tránsito, contusiones pulmonares bilaterales, neumotórax basal laminar derecho, herida abrasiva con defecto de cobertura en región glútea y muslo posterior derecha, abrasión en cara anterior de hemotórax y abdomen derecho, fractura abierta de peroné derecho, fractura de tibia a distal derecha, fractura de rama ilion e isquípica bilateral con fractura de sacro s2 con disociación lumbo – pélvica, pop 24/04/2020 aplicación de fijador externo transarticular en tobillo derecho lavado desbridamiento de fractura abierta en tibia lavado desbridamiento en glúteo y muslo derecho.

Manifiesta que, la señora Russi Herrera; fue atendida en el hospital San José, ingresando el día 24 de abril de 2020, y egreso el 20 de mayo de 2020.

Indica que la Fiscalía 69 Seccional con fecha 05 de julio de 2020, archivo las diligencias radicadas bajo el No. 11001-60-000-18-2020- 50543, manifestando que no le fue posible establecer el sujeto activo de la conducta.

Que al Centro Automático de Despacho se le ha solicitado en varias ocasiones entregue la copia del video de la cámara ubicada en la avenida Caracas No. 2-34 estación de servicio móvil, de la fecha y hora del accidente, con resultados inútiles.

Finalmente, a la Administradora de Recursos en Salud (ADRES) se le solicito a favor de la señora MARY LUNA RUSSI atención médica, indemnización o pensión según sea pertinente, mas no se ha logrado dicho trámite a la fecha.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos fundamentales de **PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA** de la accionante, y se ordene al **CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO- CAD** que en el término de cuarenta y ocho horas (48 h) entregue el video del fecha 23 de abril de 2020, a las 23:50 horas; de otro lado en caso de que no pueda establecerse el vehículo que ocasiono el daño, le sea ordenado a la Administradora de Recursos en Salud (ADRES) la atención médica, indemnización o pensión según sea pertinente a favor de la accionante.

PRUEBAS

La parte accionante anexa con el escrito tutelar, los siguientes documentos:

- Poder
- Caso Noticia No. 110016000018202050543
- Respuesta caso CAS -143550 H3 N0C6 CRM: 00150001245
- Oficio No. S-2020 316197 / SUBCO CAD 1.10 del 14 de septiembre de 2020

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 18 de febrero de 2021, se ordenó la notificación de la **FISCALIA 69 SECCIONAL**, el **CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO CAD**, y la **ADMINISTRADORA DE RECURSOS EN SALUD - ADRES**, para que en el término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 19 de febrero de 2021, se notificó a través del correo institucional del Juzgado a la **FISCALIA 69 SECCIONAL**, al **CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO CAD**, y la **ADMINISTRADORA DE RECURSOS EN SALUD - ADRES**, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- Dentro del término legal conferido allego contestación la **FISCALIA 69 SECCIONAL**, el **CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO CAD**, y la **ADMINISTRADORA DE RECURSOS EN SALUD – ADRES**.

CONTESTACIÓN FISCALIA 69 SECCIONAL.

La accionada refirió: “(...) por su lado el ente Acusador, desplegó las actividades investigadas pertinentes, empero no fue posible hallar al autor del hecho.

Por lo tanto, solicito desvincular a la Fiscalía 69 Seccional, porque no existe violación de ningún derecho fundamental, como ya se explicó”.

CONTESTACIÓN CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO CAD.

La accionada refirió: “La Institución Policial ha dado respuesta a la señora accionante a través del señor LUIS CARLOS HURTADO SEGURA, de lo cual se adjunta a la presente los soportes documentales, así mismo se le ha contestado dentro de los términos de ley de manera clara, precisa y de fondo, por lo que se configura la improcedencia de la presente acción de tutela por carencia actual de objeto por hecho superado”.

CONTESTACIÓN ADMINISTRADORA DE RECURSOS EN SALUD – ADRES.

La accionada refirió: “ (...) se solicita al H. Despacho NEGAR el amparo solicitado por el accionante en lo que tiene que ver con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES, pues de los hechos descritos y el material probatorio enviado con el traslado resulta innegable que la entidad no ha desplegado ningún tipo de conducta que vulnere los derechos fundamentales del actor, y en consecuencia DESVINCULAR a esta Entidad del trámite de la presente acción constitucional”.

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

La ciudadana **MARY LUNA RUSSI HERRERA** identificada con la C.C 1.012.917.867; ostenta legitimidad por activa para interponer la presente acción, en virtud de lo dispuesto en el art. 86 de la Constitución Política de Colombia. *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia la **FISCALIA 69 SECCIONAL**, el **CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO- CAD** y la **ADMINISTRADORA DE RECURSOS EN SALUD – ADRES** son las entidades a quienes se le atribuye la vulneración de los derechos invocados y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO.

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino también en todas las actuaciones, procedimientos y procesos administrativos¹¹⁶, de manera que se garantice (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados.(Sentencia T-543/17).

DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la repuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).

El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

DEL CASO EN CONCRETO

Corresponde a esta Juzgadora determinar si en la presente acción de tutela la **FISCALIA 69 SECCIONAL**, el **CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO- CAD** y la **ADMINISTRADORA DE RECURSOS EN SALUD – ADRES** se encuentran vulnerando los derechos fundamentales de **PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**; al proceder por la primera de las accionadas a archivar las diligencias radicadas bajo el No. 11001-60-000-18-2020- 50543, manifestando que no le fue posible establecer el sujeto activo de la conducta; por la segunda de las accionadas al no entregar la copia del video de la cámara ubicada en la avenida caracas No. 2-34 estación de servicio móvil, de la fecha y hora del accidente; y finalmente por la tercera de las accionadas no asumir la atención médica, indemnización o pensión según sea pertinente.

Junto con el escrito de tutela se arrió caso noticia No. 110016000018202050543, correspondiente al Despacho Fiscalía 69 Seccional, con fecha de asignación 10 de mayo de 2020, y con estado inactivo, archivo por imposibilidad de encontrar el sujeto activo.

También obra escrito respuesta de caso CAS -143550 H3N0C6 CRM:00150001245, con fecha 02 de octubre de 2020, dirigido al señor LUIS CARLOS HURTADO SEGURA luiscpedro7@gmail.com del que se lee: “(...) se informa que desea presentar una reclamación de indemnización por incapacidad permanente, deberá presentar los documentos definidos en el Artículo 2.6.1.4.3.1 del Decreto 780 de 2016 y el Artículo 5º de la Resolución 1645 de 2016 que se relacionan a continuación (...).

Además de los documentos relacionados en el artículo 2.6.1.4.3.1 del Decreto 780 de 2016, para presentar las reclamaciones ante la Subcuenta ECAT del 'FOSYGA, o quien haga sus veces, las personas naturales deberán anexar los documentos definidos en el numeral 1 del artículo 5 del decreto 1645 de 2016.

En todo caso, para establecer si una reclamación tiene acreditado el derecho al pago, se requiere que, finalice el trámite auditoría integral (en salud, jurídica y financiera), surtiendo las etapas señaladas en el Artículo 9 de la Resolución 1645 de 2016, cuyo resultado puede ser i) aprobación parcial ii) aprobación total o la iii) negación por no encontrarse acreditado el derecho o por no cumplir con los requisitos establecidos para el pago.

Bajo este contexto, se precisa que, las solicitudes de reclamaciones que se presentan ante la ADRES o quien haga sus veces, no contienen derechos económicos ciertos, pues tales derechos se adquieren solamente hasta cuando la reclamación producto de la auditoría integral obtenga resultado de “aprobado”.

Finalmente, se informa que en cumplimiento del artículo 25 de la Resolución 2433 del 02 de abril del 2020, el reclamante podrá remitir copia simple de los documentos relacionados anteriormente por vía electrónica a los correos correspondencia1@adres.gov.co y correspondencia2@adres.gov.co; para lo cual debe

tener en cuenta los lineamientos descritos en el artículo 66 de la mencionada Resolución”.

Se aporó oficina No. S-2020-316197/ SUBCO CAD. - 1.10 del 14 de septiembre de 2020, dirigido al señor LUIS CARLOS HURTADO SEGURA con correo electrónico “luiscpedro7@gmail.com” del que se lee: “(...) En atención al requerimiento de fecha 31 de agosto de 2020, a través del cual solicita grabación de la cámara de video vigilancia ubicada en la Av. Caracas con diagonal 2 Bis del día 23 de abril de 2020, me permito informar que una vez realizada la verificación en los sistemas de almacenamiento de video de la cámara No. 7064 para la fecha en mención no hay grabación, debido al poco tiempo de conservación de los registros filmicos captados por las cámaras de video vigilancia y su sistema cíclico que regrababa automáticamente sobre las imágenes existentes, según lo manifestado por la señora intendente jefe Rosa Quintero operador sala video CAD- MEBOG.

El CAD- MEBOG solo tiene el monitoreo de las cámaras de video seguridad, si desea conocer el estado y funcionamiento de la cámara deberá realizar solicitud a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia quienes son los administradores de las cámaras de video seguridad del Distrito Capital”.

Ahora bien, a la instancia constitucional no se arrió el escrito de derecho de petición elevado ante las autoridades que pudiera ser objeto de valoración; no obstante de las contestaciones dadas tanto por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -**ADRES**- y el CAD MEBOG el Despacho puede concluir, que por parte de los referidos entes se dio contestación de fondo a las peticiones que elevara la accionante, dado que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -**ADRES** precisó que para dar inicio a los trámites de indemnización debe presentar los documentos definidos en el Artículo 2.6.1.4.3.1 del Decreto 780 de 2016 y el Artículo 5º de la Resolución 1645 de 2016; de otro lado CAD MEBOG dio contestación indicando que realizada la verificación en los sistemas de almacenamiento de video de la cámara No. 7064 para la fecha relacionada no hay grabación, debido al poco tiempo de conservación de los registros filmicos captados por las cámaras de video vigilancia y su sistema cíclico que regrababa automáticamente sobre las imágenes existentes.

Ha dicho la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-369/13: “Se concluye entonces, que el derecho de petición consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere **“una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”**.

Así las cosas y si bien, las respuestas dadas al derecho de petición no acceden favorablemente a lo pretendido por la actora lo cierto es que mediante las contestaciones se advierte que se dio una contestación de forma clara y de fondo; a razón de lo anterior se observa que no es procedente a través de la presente acción la

protección al derecho fundamental de petición. Maxime cuando a la instancia constitucional no se arribará escrito de derecho de petición a efectos de verificar si las accionadas contestaron una a una las peticiones elevadas por la actora.

De otro lado, frente a la pretensión tendiente a que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –**ADRES**, cancele la atención médica, indemnización o pensión según sea pertinente a favor de la accionante; ha de precisarse que el art. 9 de la Resolución 1645 de 2016 establece las etapas del procedimiento para el pago de las reclamaciones ante la subcuenta ECAT del FOSYGA disponiendo lo siguiente: “ (...) 1) pre-radicación; 2) radicación; 3) auditoría integral; 4) comunicación del resultado de auditoría y respuesta al mismo; y/o 5) pago, cuando este último proceda”.

En atención a lo anterior, se verifica que existe un trámite administrativo que debe agotarse frente a la entidad, así las cosas, no puede a través del mecanismo de tutela accederse a la pretensión mencionada en el párrafo que antecede, toda vez que cuando la tutelante cuenta con otros recursos o medios de defensa judiciales y/o administrativos, el mecanismo Constitucional es improcedente, **salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.**

Sobre estos requisitos para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio la Corte Constitucional ha dicho:

“La noción de perjuicio que trae el inciso 2° del numeral 1° del art. 6° del Decreto 2591 y que en su noción básica reproduce el inciso primero del art. 1° del Decreto 306 de 1992, contiene dos elementos que permiten su precisión, a fin de que su amenaza autorice el uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio: el primero referido a su carácter “irremediable” y el segundo a que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante “indemnización”. Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o instrumento. Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho; y en este sentido debe tomarse la expresión “perjuicio irremediable”. El segundo elemento así lo viene a confirmar cuando predica que el daño, trátase de sus categorías moral ó material, que tiene bien acogidas la jurisprudencia colombiana de tiempo atrás, cuando de considerar la eventualidad del perjuicio irremediable se trata puede ser indemnizado en su integridad”. (Sentencia T-468, del 17 de julio de 1992)”.

Conforme lo indicado, en el presente asunto, no logro comprobarse la presencia de un perjuicio irremediable, debido al escaso material probatorio que se adjuntó con el escrito tutelar, concluyéndose que a fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios sufridos por el accidente de tránsito, deberá iniciar el correspondiente trámite ante las autoridades judiciales competentes.

Finalmente, frente al actuar desplegado por la **FISCALÍA 69 SECCIONAL**, el Despacho no observa actuar vulnerador, toda vez que es la ley la que regula que el archivo de las diligencias procede en caso de no poder identificar al sujeto activo del delito.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional por la ciudadana **MARY LUNA RUSSI HERRERA** identificada con la C.C 1.012.917.867; contra la **FISCALIA 69 SECCIONAL**, el **CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO- CAD** y la **ADMINISTRADORA DE RECURSOS EN SALUD – ADRES**, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

TERCERO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 030 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-
SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

938d942aa8e7ef12d0a0ec947ee88510bb37f277820ad9be53e5c80e2dbebd53

Documento generado en 02/03/2021 06:57:00 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>